

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO

RESTRICTED

S/WPGR/M/19

21 de enero de 1999

(99-0216)

Grupo de Trabajo sobre las Normas del AGCS

INFORME DE LA REUNIÓN CELEBRADA EL 1º DE DICIEMBRE DE 1998

Nota de la Secretaría

1. La decimonovena reunión del Grupo de Trabajo sobre las Normas del AGCS estuvo presidida por el Sr. Harald Fries, de Suecia. El orden del día de la reunión, contenido en el documento WTO/AIR/980, constaba de seis puntos: negociaciones sobre salvaguardias de conformidad con el artículo X del AGCS; negociaciones sobre subvenciones de conformidad con el artículo XV del AGCS; negociaciones sobre contratación pública de conformidad con el artículo XIII del AGCS; informe sobre las actividades del Grupo de Trabajo al Consejo del Comercio de Servicios; fecha de la próxima reunión del Grupo de Trabajo, y otros asuntos.

PUNTO A: NEGOCIACIONES SOBRE SALVAGUARDIAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO X DEL AGCS

2. El Presidente recordó que se había pedido a la Secretaría que elaborase un documento, el cual se distribuyó con la signatura S/WPGR/W/27. En ese documento se examinaron, en primer lugar, las formas posibles de un mecanismo de salvaguardia en el marco del AGCS, teniendo en cuenta las sugerencias presentadas por los Miembros. En segundo término, se analizó en detalle la lista de cuestiones presentada por Venezuela (documento sin signatura N° 5412, de fecha 14 de octubre de 1998), sobre la base de las opiniones manifestadas por las delegaciones y los precedentes del artículo XIX del GATT de 1994 y el Acuerdo sobre Salvaguardias. A fin de organizar el debate, el Presidente propuso que los Miembros abordasen las dos partes del documento por separado.

Formas posibles de un mecanismo de salvaguardia

3. Varias delegaciones destacaron la necesidad de examinar a fondo la aplicabilidad de las diferentes formas de mecanismos de salvaguardia señaladas en la Nota de la Secretaría. La representante de las Comunidades Europeas y el representante de México observaron que debían tenerse en cuenta los aspectos específicos del comercio de servicios. El representante del Brasil insistió en que uno de los fundamentos básicos de un mecanismo de salvaguardia era que constituyese un recurso en el caso de acontecimientos imprevistos. Las representantes de Australia y las Comunidades Europeas manifestaron su apoyo a un enfoque similar al utilizado en el Acuerdo sobre Salvaguardias, en virtud del cual todas las empresas establecidas en el país, independientemente de su origen, recibían el mismo trato. El representante de Tailandia agregó que sería conveniente un mecanismo que pudiese incorporar criterios cuantitativos y restricciones de procedimiento. El representante de Egipto señaló que todo mecanismo de salvaguardia debería combinar los elementos contenidos en el artículo XIX del GATT de 1994, el artículo 5 del Acuerdo sobre la Agricultura y el artículo 6 del Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido.

4. El representante del Japón se mostró reticente respecto de la posibilidad de incluir mecanismos de salvaguardia para sectores específicos en las listas individuales. A su juicio, eso podría dar lugar a una excesiva flexibilidad y acarrear la inestabilidad de los compromisos existentes. Empero, podría mejorarse el enfoque si se combinase con alguna forma de directrices comunes. La representante de México agregó que la idea de los mecanismos de salvaguardia para sectores

específicos resultaba interesante como objeto de debate, pero podría provocar la fragmentación del sistema. En consecuencia, opinaba que era más adecuado un mecanismo de salvaguardia horizontal o general. El representante de Hong Kong, China coincidió. En su opinión, la existencia de diferentes tipos de medidas de salvaguardia urgentes podría dificultar en demasía la interpretación de las listas. Habida cuenta de la falta de datos estadísticos, tal vez fuese necesario aplicar un mecanismo horizontal a determinados sectores en un principio y ampliarlo a otros cuando se contase con estadísticas. Los representantes de Polonia y Noruega indicaron que preferían un enfoque que tuviese en cuenta los sectores específicos. El segundo admitió, sin embargo, que podría tener efectos negativos respecto de la transparencia si se lo comparaba con una disposición de salvaguardia general. La representante de las Comunidades Europeas hizo notar que un enfoque en el que se tuviesen en cuenta los sectores específicos podría responder a necesidades específicas de los distintos sectores de servicios. Ahora bien, el Grupo de Trabajo todavía no había debatido el tema lo suficiente para sacar conclusiones. El representante de los Estados Unidos estuvo de acuerdo en que era preciso profundizar el análisis del enfoque antes de poder adoptar una decisión. La posibilidad de recurrir a las salvaguardias dependería de criterios específicos relacionados con las características del sector. Tal vez no debería exigirse la determinación de la existencia del perjuicio ya que ésta no podría basarse en datos empíricos suficientes.

5. En relación con el artículo 5 del Acuerdo sobre la Agricultura, el representante de los Estados Unidos manifestó dudas sobre su aplicabilidad a los servicios. Los antecedentes de política eran muy diferentes en la agricultura y si bien no existía la prescripción respecto del perjuicio, la invocación del artículo dependía de una considerable cantidad de información empírica que en el caso de los servicios era inexistente. El representante del Canadá observó también que aunque faltaba un criterio sobre los perjuicios, debían cumplirse rigurosos requisitos con respecto a los datos a fin de activar el mecanismo, entre ellos, datos sobre el volumen de las importaciones y el consumo interno del producto en cuestión y su precio de importación. Además, era preciso contar con datos correspondientes a una serie de años consecutivos a fin de fijar los niveles de los precios de activación. Resultaba dudoso que pudiesen cumplirse los mencionados requisitos en el comercio de servicios. El representante del Japón expresó preocupaciones similares. La representante de Venezuela agregó que un elemento interesante del mecanismo era que permitía un grado constante de acceso al mercado.

6. El representante de los Estados Unidos, aludiendo al artículo 6 del Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido, señaló similitudes con el artículo XIX del GATT de 1994 y, por ende, similares prescripciones respecto de los datos. Empero, la evolución del sector de los textiles estaba registrada en excelentes estadísticas, a diferencia de lo que ocurría en el de los servicios. El representante del Canadá señaló a la atención del Grupo de Trabajo el hecho de que el mencionado mecanismo podría utilizarse de un modo selectivo, sobre la base de determinados criterios como el de perjuicio grave. Este enfoque sería difícil de aplicar al comercio de servicios. El representante del Japón manifestó preocupación con respecto a la ausencia en dicho mecanismo del principio de trato de nación más favorecida (NMF), pero consideró que era positivo que la carga de la prueba recayese en el país que imponía la salvaguardia. La representante de Venezuela recomendó que se profundizase el examen de otro elemento del mecanismo de salvaguardia del Acuerdo de los Textiles y el Vestido, a saber, el trato especial previsto para los países con un pequeño volumen de exportaciones y los países menos adelantados.

Definición y alcance de las salvaguardias en los servicios

7. Las representantes de Australia y las Comunidades Europeas manifestaron que las medidas de salvaguardia deberían ser aplicadas por los Miembros, ya sea mediante reglamentaciones gubernamentales o mediante la delegación de facultades. Desde el punto de vista de las Comunidades era importante, en el segundo caso, que la delegación de las facultades resultase clara y se garantizase el cumplimiento de las condiciones pertinentes. Por ejemplo, si participase una asociación

profesional, tendría que adoptar las mismas medidas que cualquier organismo gubernamental para aplicar medidas de salvaguardia.

8. La representante de Australia expresó su apoyo a un enfoque que siguiese el modelo del Acuerdo sobre Salvaguardias, en el cual toda medida había de adoptarse en nombre de una rama de producción nacional. A su vez, se definió el concepto de rama de producción nacional como la que produce productos similares o directamente competidores en el ámbito del territorio de un Miembro. El representante de Hong Kong, China señaló que, en teoría, toda medida debería aplicarse únicamente a los nuevos operadores y no a las empresas preexistentes, e independientemente de la nacionalidad. El representante del Japón también se mostró escéptico con respecto a si se podía o si se debía hacer una diferenciación y destacó la importancia de definir con claridad las importaciones. El representante del Brasil opinó que no debía diferenciarse entre la inversión nacional y la inversión extranjera y que las medidas debían afectar únicamente a los nuevos operadores. El representante del Canadá observó que la aplicación de criterios basados en la nacionalidad podría redundar en la expropiación de los inversionistas extranjeros. A su vez, esto podría afectar a las inversiones en jurisdicciones extranjeras.

9. La representante de Australia veía la posibilidad de un conflicto entre la protección de los derechos adquiridos de las empresas extranjeras establecidas en el territorio nacional y el principio NMF. Las salvaguardias no debían consistir en medidas que forzasen a la desinversión o debilitasen la obligación de trato NMF. El representante de los Estados Unidos hizo notar la importancia de proteger la categoría de proveedores establecidos y de respetar el principio NMF. A su juicio, lo fundamental era determinar cuál era la finalidad de una medida de salvaguardia que se aplicase al modo de suministro 3. La cuestión de los derechos adquiridos tendría que analizarse a fondo. La representante de Venezuela destacó el interés de política en lo relativo a garantizar las inversiones y asegurar la previsibilidad.

10. En el debate sobre los sectores abarcados, la representante de Australia propuso que se concentrase la atención en esferas en las que existiesen buenas estadísticas. Ahora bien, se trataba de una cuestión difícil, dada la falta general de datos. En cuanto a los modos de suministro comprendidos, prefería un mecanismo de salvaguardia que se aplicase únicamente a los modos de suministro individuales. Si bien era dable sostener que en ese caso los proveedores extranjeros tal vez adoptarían mayormente modos de suministro no restringidos, no debería sobrestimarse la posibilidad mencionada, dados los costos que acarrearía cambiar de un modo a otro. No obstante, su delegación podría respaldar también un enfoque que permitiese una aplicación más amplia, siempre que se basase en una evaluación individual de los casos. El representante del Brasil opinó que era importante tener en cuenta la finalidad de las salvaguardias, por ejemplo, la protección del empleo o la inversión. La intensidad de mano de obra de muchos servicios constituía un argumento importante a favor de un mecanismo de salvaguardia. La representante de las Comunidades Europeas, aun cuando no estaba totalmente convencida de la necesidad de un mecanismo de salvaguardia, manifestó preferir un enfoque horizontal porque resultaba más transparente. La falta de información actual en muchas ramas de producción sobre el funcionamiento del AGCS se vería agravada si se formularan nuevas normas para los sectores específicos. Por otra parte, no veía la necesidad de establecer distinciones entre los modos de suministro en relación con las medidas de salvaguardia. El representante de Egipto se mostró partidario de un mecanismo que comprendiese todos los servicios y todos los modos de suministro sin desalentar la inversión.

Situaciones que justifican su aplicación. Tipos de daño

11. La representante de las Comunidades Europeas señaló que los Miembros que se manifestaban a favor de las salvaguardias hasta el momento no habían presentado ejemplos de situaciones apremiantes que requiriesen una protección urgente. Sin embargo, era esencial analizar ese tipo de ejemplos. El representante del Canadá reiteró que debido a la situación de las estadísticas en el sector de los servicios, el concepto de daño grave a la rama de producción nacional no resultaba pertinente.

En el contexto de las mercancías podía aplicarse una salvaguardia a productos importados que se comercializasen con lealtad, es decir, que no fuesen objeto de dumping ni subvencionados, con miras a evitar su desplazamiento económico en el mercado nacional. En consecuencia, era esencial que se aplicasen normas muy estrictas con respecto al daño que, a la vez, tenían que basarse en información precisa sobre la situación financiera de las distintas empresas de la rama de producción afectada. La representante de Australia opinó que el Acuerdo sobre Salvaguardias podría servir de modelo en circunstancias en las cuales cabría aplicar las mencionadas medidas a los servicios; empero, las deficiencias en materia de estadísticas planteaban problemas para la determinación de la existencia del daño. Asimismo, habría que asegurar que en las investigaciones se tomarían en cuenta consideraciones de interés público más amplias, entre ellas, el interés de las ramas de producción que dependiesen del servicio en cuestión en calidad de insumo. A juicio del representante del Japón, el concepto de interés público era ambiguo y podría generar incertidumbre innecesariamente. El representante de Tailandia, en nombre de la ASEAN, señaló que el Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido contenía disposiciones sobre la atribución del daño que deberían tenerse en cuenta; la carga de la prueba recaía en el Miembro que se amparase en la disposición.

Medidas temporales o provisionales

12. El representante del Canadá observó que en el contexto de las mercancías las salvaguardias tenían por objeto permitir que una rama de la producción nacional se ajustase a la competencia extranjera durante un período de transición limitado. El Grupo de Trabajo tendría que considerar qué circunstancias debería amparar una salvaguardia en el contexto de los servicios y si resultaba adecuado el principio de ajuste. La representante de Australia manifestó que el artículo 7 del Acuerdo sobre Salvaguardias podría servir de modelo. Empero, dada la carencia de estadísticas, tenía reticencias con respecto a las medidas de salvaguardia provisionales. Para las Comunidades Europeas el carácter temporal de la medida obedecía a su objetivo de resolver una situación urgente. Una solución permanente podría lograrse en el marco de otras disposiciones del AGCS. Era preciso que los Miembros estableciesen la duración de un período adecuado y los recursos disponibles en el caso de que la situación de emergencia persistiese una vez que hubiese concluido dicho período. Por ejemplo, ¿debería exigirse que se invocase el artículo XXI en esa situación?

Procedimientos aplicables. La investigación del daño

13. El representante del Canadá deseaba saber qué tipo de información se utilizaría para la investigación. Se había hecho referencia a las declaraciones del impuesto sobre la renta y del impuesto sobre el valor añadido. Ahora bien, en el Canadá, y posiblemente en otros países, ese tipo de información estaba protegida por leyes destinadas a resguardar la vida privada. La representante de Venezuela señaló que correspondía a la rama de producción afectada proporcionar la información pertinente para corroborar la existencia del daño. La representante de Australia propuso que se tomase el artículo 3 del Acuerdo sobre Salvaguardias como base para profundizar el análisis. El representante de Hong Kong, China también pensaba que en el mencionado Acuerdo había elementos que podían utilizarse en el contexto de los servicios.

Medidas aplicables. Principios de trato nacional y no discriminación

14. El representante del Canadá se mostró escéptico con respecto a que las medidas de salvaguardia que consistían en la suspensión temporal del acceso al mercado o del trato nacional pudiesen hacerse cumplir alguna vez, en especial en relación con los modos de suministro 1 y 2. Por ejemplo, resultaría difícil identificar, vigilar y restringir los servicios que se prestan por medios electrónicos. La representante de Australia hizo notar que si bien las medidas de salvaguardia implicarían la suspensión de los compromisos del acceso al mercado y el trato nacional, no era seguro que afectasen a compromisos adicionales en el marco del artículo XVIII. A su juicio, ese tipo de medidas deberían servir como protección contra daños imprevisibles relacionados con la consignación en listas de los compromisos de liberalización. No obstante, su delegación conocía los problemas

conceptuales existentes, entre ellos la definición de acontecimientos imprevistos y el marco temporal pertinente. La representante de las Comunidades Europeas volvió a mencionar la prescripción de trato NMF contenida en el artículo X del AGCS. Con respecto a las restricciones cambiarias, el representante del Japón recordó a las delegaciones las disposiciones pertinentes del artículo XI del AGCS. El representante de Egipto señaló que debía considerarse aceptable una suspensión provisional del acceso al mercado y del compromiso de trato nacional, sobre la base del principio NMF.

Transparencia y notificaciones

15. La representante de las Comunidades Europeas reconoció la importancia de estas obligaciones. La representante de Australia hizo hincapié en la necesidad de contar con normas similares a las vigentes en el ámbito de las mercancías.

Trato especial y diferenciado

16. La representante de Australia reconoció la importancia del trato preferencial y diferenciado, pero consideró prematuro analizar los detalles en la etapa en curso. La representante de las Comunidades Europeas señaló que ya existían disposiciones pertinentes en el AGCS, y que su aplicación a las situaciones de salvaguardia podría requerir una evaluación individual de cada caso. Por ejemplo, podrían tenerse en cuenta los distintos niveles de desarrollo dentro de una rama de producción. El representante de Egipto subrayó la importancia del principio de trato especial y diferenciado para los países en desarrollo.

Observaciones recapitulativas

17. El Presidente observó que muchas delegaciones estaban dispuestas a considerar la opción de un mecanismo de salvaguardia para sectores específicos, pero su aplicación debería basarse en normas generales. Mientras que el mecanismo establecido en el Acuerdo sobre la Agricultura requería un sólido componente estadístico, su contraparte en el contexto de los textiles estaba reñido con el principio NMF. Al parecer, había consenso con respecto a que sólo los gobiernos de los Miembros u organismos con mandato oficial deberían estar facultados para adoptar medidas de salvaguardia. Si bien muchas delegaciones habían manifestado que no debía diferenciarse entre los proveedores locales y los nacionales, las opiniones expresadas en reuniones anteriores sugerían que tal vez habría que debatir más a fondo esa cuestión. Lo mismo se aplicaba al concepto de derechos adquiridos, aunque al parecer había consenso respecto de que las inversiones existentes debían protegerse. Por otra parte, también era necesario continuar el debate a fin de especificar las circunstancias que justificarían la aplicación de las medidas y los criterios pertinentes para la determinación del daño.

18. El Grupo de Trabajo decidió continuar el debate de la Nota de la Secretaría en la reunión siguiente. El representante de Tailandia hizo hincapié en que era importante producir resultados concretos, es decir, el proyecto de normas de salvaguardia, según el plazo fijado en junio de 1999. El representante de Egipto reiteró que el próximo paso de la Secretaría debería consistir en preparar un proyecto de acuerdo basado en las opiniones manifestadas por los Miembros. El debate en curso de la Nota de la Secretaría no haría progresar la labor del Grupo de Trabajo.

PUNTO B: NEGOCIACIONES SOBRE SUBVENCIONES DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO XV DEL AGCS

19. El Presidente reiteró que en la reunión anterior algunas delegaciones habían propuesto el debate de las dos cuestiones señaladas en la Nota del Presidente (documento sin signatura N° 5169, de fecha 22 de septiembre de 1998). Dicho debate podría contribuir a aclarar el alcance preciso de las disciplinas vigentes del AGCS en el ámbito de las subvenciones y a identificar las circunstancias de distorsión del comercio, si las hubiese, que no estuviesen satisfactoriamente abarcadas en la

actualidad. Las dos cuestiones se relacionaban con los programas de subvenciones que tenían a) efectos de "sustitución de las importaciones", o b) efectos de "fomento de las exportaciones".

20. El representante de la Argentina se manifestó de acuerdo con la evaluación efectuada por la Secretaría en el párrafo 39 del documento S/WPGR/W/9: "... *aun cuando la obligación de trato nacional no impone limitación alguna al nivel de subvenciones que pueden otorgar los Miembros, es pese a ello una disciplina potencialmente enérgica con respecto a la utilización no discriminatoria de subvenciones. Ahora bien, la realización de ese potencial depende ante todo de la medida en que los Miembros consignen en sus Listas compromisos libres de limitaciones al trato nacional relacionadas con las subvenciones y, en segundo lugar, de que la obligación de trato nacional se interprete en el sentido de abarcar todos los modos de suministro*". La aclaración dada en las Directrices para la consignación en listas de los compromisos (MTN/GNS/W/164), que exige a los Miembros de adoptar medidas fuera de la jurisdicción territorial, significaba que en el contexto del artículo XVII no existía obligación alguna de otorgar subvenciones a proveedores establecidos en el exterior. Empero, las Directrices se referían exclusivamente al trato de los proveedores y no de los servicios, si bien el AGCS los abarcaba a ambos. En opinión de la Argentina la obligación de trato nacional se aplicaba a todos los servicios prestados en el territorio de un Miembro, independientemente de su fuente o modo de suministro. Las limitaciones consignadas con respecto a las subvenciones recopiladas en el documento S/WPGR/W/13 sugerían que otros Miembros compartían la mencionada interpretación; de otro modo, no habrían exceptuado a las subvenciones del trato nacional en el contexto de los modos de suministro 1 y 2.

21. Con respecto a las subvenciones con efectos de sustitución de las importaciones, convenía distinguir entre los servicios de origen nacional y los de origen local. Si con respecto al modo 3 se beneficiasen con las subvenciones únicamente los proveedores nacionales y no los proveedores de los demás Miembros, aun cuando estuviesen establecidos en el territorio del Miembro que concediese la subvención, se trataría de una violación patente del principio de trato nacional. En cambio, si las subvenciones beneficiasen a todos los servicios producidos en el territorio nacional, independientemente del origen del proveedor, por lo general no violarían el principio de trato nacional en el contexto del modo de suministro 3. Ahora bien, este modo de suministro podría ampliarse en perjuicio del comercio efectuado en el contexto de otros modos. Así estructuradas, las subvenciones como los incentivos para la inversión, que estaban sujetos a la obligación de trato nacional con respecto al modo de suministro 3, tal vez tendrían que evaluarse en un contexto más amplio.

22. En cuanto a las subvenciones con efectos de fomento de las exportaciones, en la práctica su importancia dependería del modo predominante que se utilizase para prestar el servicio. Ahora bien, el representante de la Argentina no estaba seguro de que la subvención de los servicios estuviese destinada esencialmente a promover las exportaciones. No obstante, cabría suponer que los incentivos para la inversión o la radicación promovían no sólo la producción destinada al consumo interno sino también la destinada al consumo de extranjeros. Un caso que podía señalarse era la prestación de servicios por medios electrónicos. Con todo, al igual que en otros sectores de servicios, la falta de información atentaba contra la posibilidad de seguir investigando el tema con seriedad.

23. La representante de Venezuela subrayó la necesidad de ampliar las aclaraciones sobre el alcance de la labor en el marco del artículo XV. Propuso que se efectuase una reunión informal o una sesión de intercambio de ideas para aclarar esos asuntos. Su propuesta recibió cierto apoyo y se acordó retomar el tema en una reunión futura.

PUNTO C: NEGOCIACIONES SOBRE CONTRATACIÓN PÚBLICA DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO XIII DEL AGCS

24. El Presidente recordó que la reunión anterior se había dedicado a debatir el ámbito de aplicación de la contratación pública de servicios. En su opinión, había llegado el momento de tratar de formular conclusiones y, cuando fuese necesario, señalar las principales cuestiones que debían

continuar en estudio. El debate podría entonces continuar sobre el segundo punto del programa de trabajo, es decir, la aplicación de la disciplina básica de la no discriminación a la contratación de servicios. Cabría dividir el debate en tres partes tomando como base las tres preguntas formuladas en el documento no oficial de las Comunidades Europeas y sus Estados miembros (de fecha 13 de febrero de 1998). En el contexto de la primera pregunta relativa a las transacciones que constituyen contratación, las delegaciones habían reconocido que hacía falta más información sobre la manera en que se definían y trataban las concesiones en el contexto de las legislaciones nacionales. En respuesta al Cuestionario sobre la Contratación Pública de Servicios sólo la Argentina y Costa Rica habían facilitado información detallada sobre las concesiones. En las respuestas de Colombia; Hong Kong, China y Polonia también se habían mencionado las concesiones.

25. El representante de la Argentina hizo hincapié en que era preciso contar con más información para comprender qué se entendía por concesiones. En ese contexto era importante no concentrarse en las definiciones de las transacciones entre el Estado y los proveedores privados, porque podrían variar en las diversas legislaciones. En cambio, debía tomarse como base el carácter económico de las transacciones. Los contratos de adquisición tenían que ver con las entidades públicas y abarcaban lo que podría denominarse servicios públicos. Si bien el Estado era el encargado de su prestación, existían distintos procedimientos. El Estado podía usar sus propios recursos y personal o contratar a un tercero para llevar a cabo el trabajo. En el segundo caso, la relación contractual podía tener una duración limitada y comprender sólo al Estado y a una empresa encargada de llevar a cabo el trabajo y pagada por el Estado. La otra opción consistía en una relación contractual permanente con el proveedor en la que también participaba el usuario del servicio quien, en cierto modo, contribuía al pago. Esta opción tenía que ver con las obras públicas y las concesiones de servicios públicos, en las que el Estado permitía que un tercero prestara un servicio al público sin ceder su competencia y en la que el proveedor por lo general recibía un pago del usuario. El precio correspondiente podía ser fijado o subvencionado por el Estado. Esas transacciones no comprendían concesiones relacionadas con la explotación de un depósito natural, por ejemplo, minas, las cuales no estaban abarcadas por el AGCS.

26. El representante del Canadá dijo que en el documento de las Comunidades Europeas se sugería que la transacción para el servicio en sí (a diferencia de la compra o el alquiler del servicio) no parecía estar comprendida en el Acuerdo sobre Contratación Pública. En el documento se señalaba que dichas transacciones no eran de beneficio ni utilidad para el gobierno y, en consecuencia, tampoco estarían comprendidas en la actual definición de los servicios del artículo XIII del AGCS. No resultaba claro qué se quería decir realmente con la frase crítica utilizada en el documento de las Comunidades Europeas respecto de la transacción para el servicio en sí. Convendría analizar algunos casos. ¿Podría considerarse, por ejemplo, que un contrato por el cual se facilitase una licencia a un contratista del sector privado para distribuir datos sobre contrataciones públicas en un servicio electrónico de licitaciones y generar ingresos a partir de los adquirentes de dichos datos estuviese comprendido en la definición de transacción para el servicio en sí? Y, en caso afirmativo, ¿sobre qué base no se ajustaría a las definiciones de contratación pública contenidas en el Acuerdo sobre Contratación Pública y en el artículo XIII del AGCS? En cuanto a cómo proseguir con la labor, sugirió que se solicitase a la Secretaría que preparase una nota en la que figurasen los tipos de políticas que se aplicaban a la contratación pública y que podían ser incompatibles con la no discriminación, tanto con respecto al principio NMF como al de trato nacional, con una breve explicación en cada caso.

27. El Presidente observó que las definiciones de concesiones variaban y que convendría que los Miembros facilitasen una breve descripción del concepto que merecían las concesiones en el contexto de la legislación nacional. Respecto de la propuesta del Canadá, recordó que diversos documentos contenían la información solicitada, a saber, el documento S/WPGR/W/3, la sección 9 del documento S/WPGR/W/20 y la presentación de Nueva Zelandia (documento sin signature N° 5446, de fecha 30 de septiembre de 1997). Recordó además que las otras dos preguntas formuladas en la presentación de las Comunidades Europeas, es decir, quién era la entidad contratante y qué era lo que

se contrataba, todavía no se habían debatido. Propuso que el debate continuase en la reunión siguiente sobre el alcance y la definición y que se abordasen las dos preguntas mencionadas en ese contexto.

PUNTO D: INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL GRUPO DE TRABAJO AL CONSEJO DEL COMERCIO DE SERVICIOS

28. El Presidente indicó que el proyecto de informe del Grupo de Trabajo al Consejo del Comercio de Servicios se había distribuido con la signatura S/WPGR/W/28. Dicho informe era de carácter esencialmente fáctico. El Grupo de Trabajo aprobó el informe con una modificación propuesta por el representante de Tailandia en nombre de la ASEAN.

PUNTO E: FECHA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO

29. El Presidente propuso que la reunión oficial siguiente se celebrase el viernes 26 de febrero de 1999. El Grupo de Trabajo aceptó su propuesta.

PUNTO F: OTROS ASUNTOS

30. No se planteó cuestión alguna en el marco de este punto del orden del día.
